



CORTE DE CUENTAS DE LA REPÚBLICA



REF.: DAIP-130-2022

Resolución Definitiva

CORTE DE CUENTAS DE LA REPÚBLICA, DEPARTAMENTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DAIP: San Salvador, a las quince horas con cuarenta y cinco minutos del día veinte de enero de dos mil veintitrés.

La presente resolución tiene base en la Solicitud de Acceso a la Información Pública registrada bajo el No. **DAIP-130-2022**, recibida en este Departamento el día quince de diciembre del año dos mil veintidós y recepcionada ese misma fecha y año a nombre del ciudadano [REDACTED] quien requiere acceso textualmente a lo siguiente:

“... los nombres de los ciudadanos y copias de sus hojas de vida y atestados que fueron presentados a esa corte de Cuentas , para responder a la convocatoria pública que saco dicha entidad, a fin de convocar ciudadanos interesados, para seleccionar a las personas que, en base a dichos atestados refleje idoneidad y capacidad, para ser designada por el Organismo de Dirección de esa Corte de Cuentas , como Miembro Propietario y Otro como Suplente, designados por la CCR en el Tribunal de Ética Gubernamental, para el periodo de cinco años... ”

Mediante auto emitido a las ocho horas con cinco minutos del día veintidós de diciembre del año dos mil veintidós se previno al señor [REDACTED], en el sentido que especificara el periodo objeto de su consulta, otorgándole un plazo de diez días hábiles para subsanar su pretensión a la dirección de correo electrónico [REDACTED] que designo en su solicitud para ser notificado.



Que en escrito de fecha veintitrés de diciembre del año recién pasado, el señor [REDACTED] expreso: *“...la información para participar en la designación del cargo público señalado, que abarca del viernes 28 de octubre del presente año, y que finalizo el día cuatro de noviembre del presente año...”* Por lo que mediante auto emitido a las nueve horas del día cinco de enero del presente año se resolvió admitir la solicitud de información Pública, registrada con el número DAIP-130-2022.

Vista la referida Solicitud de Información y **CONSIDERANDO:**

- I. Que de conformidad con el art. 7 de la Ley de Acceso a la Información Pública, son Entes Obligados a su cumplimiento, los órganos del Estado, sus dependencias, las instituciones autónomas, las municipalidades o cualquier otra entidad u organismo que administre recursos públicos, bienes del Estado o ejecute actos de la administración pública en general. En consecuencia, es oportuno citar el Art. 195 de la Constitución de la República –Cn.-, el cual reconoce a esta Corte como el Organismo Independiente

encargado de la Fiscalización de la Hacienda Pública en general y de la Ejecución del Presupuesto en particular; determinándose de este modo, la competencia de esta Institución para conocer a través de este Departamento la solicitud en referencia; es así que de acuerdo a lo estipulado en el Art. 69 de la LAIP, el Oficial de Información es el enlace o vínculo comunicacional entre el solicitante y el Ente Obligado al que se acude, que para el caso concreto lo constituye el ciudadano [REDACTED] así como el suscrito.

II. Que de acuerdo a las funciones reguladas en el Art. 50 literales b), d), i) de la Ley en comento, corresponde a este Oficial recibir, dar trámite y resolver sobre las solicitudes de información sometidas a su conocimiento, debiendo efectuar las diligencias internas necesarias para la localización y entrega de lo peticionado salvo las excepciones expresamente establecidas en la Ley; así como entregar por escrito al solicitante todas las decisiones que emita, con mención suficiente de sus fundamentos, precisándose las razones de hecho y Derecho que determinaron o indujeron a la entidad a adoptar su decisión, tal como lo establece el artículo 65 del citado cuerpo legal.

III. De conformidad a lo establecido en el art. 70 de la LAIP y arts. 2 y 4 de los Lineamientos para la Gestión de Solicitudes de Acceso a la Información Pública, este Departamento mediante correo electrónico, procedió a trasladar los requerimientos hacia la Dirección de Recursos Humanos de esta Corte.

IV. En auto de las quince horas con cincuenta minutos del día trece de enero del presente año, se concedió la prórroga de cinco días hábiles solicitada por esa Dirección, misma que fue notificada al ciudadano.

V. De conformidad a lo establecido en el art. 70 de la LAIP y arts. 2 y 4 de los Lineamientos para la Gestión de Solicitudes de Acceso a la Información Pública, la Dirección de Recursos Humanos dio respuesta de la siguiente manera: *"...De acuerdo a resolución emitida por la Sala de lo Contencioso Administrativo referencia 21-20-RA-SCA, los nombres constituyen datos personales que conciernen a cada ciudadano.*

En cuanto al resto de la información se hace de su conocimiento que esta aún forma parte de un procedimiento deliberativo que se encuentra en trámite..."

VI. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES.

En cuanto a proporcionar los nombres es importante mencionar independientemente de ser particulares existen una serie de pronunciamientos de la Sala de lo Contencioso Administrativo,

como ente superior para conocer de los procedimientos Administrativos de su jurisdicción y competencia, y por parte del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) como rector de la materia; específicamente en la resolución bajo el número NUE-129-A-2020 (YC) de las nueve horas con dieciocho minutos del treinta de abril de dos mil veintiuno cita a dicha Sala mencionando: la Resolución REF21-20-RA-SCA emitida a las once horas con treinta minutos del dieciséis de noviembre de dos mil veinte donde se dijo “*El carácter de servidor público de los empleados de la FGR no es motivo suficiente para excluir la protección de sus datos personales puesto que tal, como se desarrollará en el siguiente apartado los empleados públicos a diferencia de los funcionarios no poseen una facultad decisoria ni directiva dentro de la Institución que justifique la divulgación pública de sus datos personales.*”

Esto no quiere decir que nunca se podrá acceder y entregar los datos personales de los empleados públicos; al contrario, según la misma LAIP, su divulgación es procedente con el consentimiento libre y expreso del titular, o bien sin el consentimiento del mismo, procede su entrega en el caso y formato prescrito en el art. 34 de la LAIP [...]”

Aunado a lo anterior, con la finalidad de esclarecer el razonamiento citado, la referida Sala también abordó en la sentencia emitida a las once horas con cuarenta y nueve minutos del trece de marzo de dos mil veinte, en el proceso de apelación con referencia: 1-20-RA-SCA que:

“...En específico, sobre los funcionarios públicos la LAIP ha determinado que es información pública de divulgación oficiosa relativa al directorio y currículum de los funcionarios públicos incluyendo su correo electrónico institucional. Por tanto, en virtud del poder de decisión y su principal trascendencia en las actuaciones estatales, si se justifica que el derecho a la protección de datos personales frente al del interés público de conocer tal información...”

Sobre la base de tal premisa, el IAIP manifestó que la información relativa a los nombres y demás información concerniente a los empleados públicos aun y cuando sus labores de colaboración tienen una incidencia en el ejercicio de la función pública, las mismas siempre se encuentran supeditadas a la decisión final y exclusiva de los funcionarios, por lo que, dicha circunstancia no denota una razón suficiente para vulnerar el derecho a la protección de datos personales de los empleados públicos. De ese modo, reiteró que dichos datos podrán ser conocidos por los particulares siempre y cuando exista consentimiento de los titulares de los datos -servidores públicos- o en los casos contemplados en el art. 34 de la LAIP.

En ese orden, con la intención de contar con claridad de lo resuelto por la Sala de lo Contencioso Administrativo, el Instituto solicitó la aclaración sobre algunos puntos de la sentencia antes citada, específicamente sobre la interpretación de la referente a la publicidad de los nombres de los servidores públicos, indicando lo siguiente: “[...] Los nombres de los servidores públicos son datos personales y por ende, información confidencial. [...] La difusión o entrega de información pública que guarde relación en el ejercicio de las funciones de los empleados públicos dentro de




la institución, no implica que deben compartirse el nombre y otros datos personales de los referidos empleados¹".

En ese sentido el IAIP retomó lo sostenido por la Honorable Sala manifestando: (...) *En consecuencia, este Instituto como ente garante del DAIP y del Derecho a la Protección de Datos Personales (DPD), pero sobre todo de la legalidad de sus actos sujetos a control jurisdiccional conforme a lo dispuesto en el art. 172 de la Constitución de la República -para el caso- a través de la jurisdicción contencioso administrativa -art. 2 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa-, considera oportuno adoptar la interpretación emitida por la referida Sala, pues resultaría contradictorio, antojadizo y arbitrario emitir fallos alejados de la interpretación de la máxima intérprete en materia administrativa. Por consiguiente, es procedente confirmar la resolución impugnada en esta sede, emitida por la oficial de información de la Presidencia de la República (...)"*.

Bajo ese contexto, este Departamento de Acceso a la Información retoma lo dispuesto por la Sala de lo Contencioso Administrativo y por el IAIP, como entes rectores de este procedimiento, cada uno desde su materia aplicando los criterios derivadas de su Jurisprudencia por ser competencia de la materia y ámbito de aplicación En razón que, como ha señalado, lo datos podrán ser conocidos por los particulares siempre y cuando exista consentimiento de los titulares o en los casos contemplados en el art. 34 de la LAIP.

Dicho artículo establece: *"Difusión sin consentimiento que señala: Los entes obligados deberán proporcionar o divulgar datos personales, sin el consentimiento del titular, en los siguientes casos:*

- 
- a) Cuando fuere necesario por razones estadísticas, científicas, o de interés general, siempre que no se identifique a la persona a quien se refieren.*
 - b) Cuando se transmitan entre entes obligados, siempre y cuando los datos se destinen al ejercicio de sus facultades.*
 - c) Cuando se trate de la investigación de delitos e infracciones administrativas, en cuyo caso seguirán los procedimientos previstos en las leyes pertinentes.*
 - d) Cuando exista orden judicial.*
 - e) Cuando contraten o recurran a terceros para la prestación de un servicio que demande el tratamiento de datos personales. Los terceros no podrán utilizar los datos personales con*

¹ Sala de lo Contencioso Administrativo de la CSJ, solicitud de aclaración dictada a las trece horas con diez minutos de dos de diciembre de dos mil veinte, en el proceso con referencia:21-20-RA-SCA.

propósitos distintos a aquellos en los cuales se le hubieren proporcionado y tendrán las responsabilidades legales que genere su actuación.

En ese sentido se advierte también que la protección de datos personales obedece al derecho constitucional de la auto determinación informativa tiene por objeto preservar la información de las personas que se encuentra contenida en registros públicos o privados frente a su utilización arbitraria —especialmente la almacenada a través de medios informáticos—, sin que necesariamente se deba tratar de datos íntimos. (Sala de lo Constitucional 142-2012 Amparo) asimismo, para el caso que nos ocupa no es procedente tal difusión en vista que no concurren ninguna de las causas tipificadas en dicho artículo; por todo lo anterior se procederá a declarar improcedente en cuanto a los nombres solicitados por las razones expuestas.



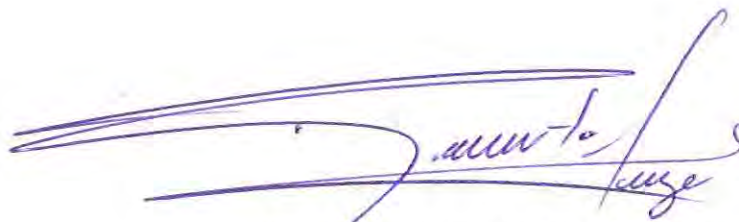
VII. DE LA INFORMACION EN PROCESO.

El Instituto de Acceso a la Información Pública ha considerado que el proceso deliberativo se refiere a las discusiones y debates previos de opiniones e informes que sirven para la toma y fundamentación de una decisión final, por lo que, el amparo de la información se configura hasta que se adopte la decisión final (Ref. 012-A-2016 de fecha 10 de junio de 2016). (Ref. 107-A-2016 de fecha 04 de julio de 2016). (Ref. 1 y 3-ADP-2015 de fecha 04 de julio de 2016), siendo en el presente procedimiento o cuando finalice, las cuales se comunican a los particulares relacionados, siendo ese el momento en que se ejerza el derecho de acceso a la información, acabado el mismo. En consecuencia, la información que forma parte de tal deliberación en el que aún no se adopta una decisión goza de indiscutible protección ya que representan insumo para la toma de ese laudo último en el cual ya no se puede modificar su resultado (Ref. 102-A-2014 de fecha 15 de octubre de 2014) (Ref. 168-A-2015 de fecha 31 de agosto de 2015). (Ref. 154 2013-2017 151-A-2015 de fecha 05 de noviembre de 2015). (Ref. 068-A-2015. de fecha 06). (Ref. 151-A-2015 de fecha 05 de noviembre de 2015).

VIII. Con base a lo manifestado por la Dirección de Recursos Humanos se establece que la información a proporcionar en la presente resolución se clasifica como **Información Pública** de conformidad con el Art. 6 literal c) de la LAIP, que es aquella en poder de los entes obligados contenida en documentos, archivos, datos bases de datos, comunicaciones y todo tipo de registros que documenten el ejercicio de sus facultades o actividades, que consten en cualquier medio, ya sea impreso, óptico o electrónico, independientemente de su fuente, fecha de elaboración, y que no sea confidencial. Dicha información podrá haber sido generada, obtenida, transformada o conservada por estos a cualquier título.

POR TANTO: En razón a lo antes expuesto y de acuerdo a lo establecido en el Art. 18 de la Constitución de la República de El Salvador, Art. 6 literal c) 65, 66, 71 y 72 literal c y 57 del respectivo Reglamento; se **RESUELVE:**

- a) *Infórmese* al ciudadano, lo comunicado por la Dirección de Recursos Humanos de esta Corte tal como se ha consignado en el Romano V de la presente resolución. Asimismo, le queda expedito el derecho de solicitar sus requerimientos de acuerdo al art. 66 de la LAIP.
- b) *Comuníquese* a la ciudadana en caso de no estar de acuerdo con la resolución, le queda expedito su derecho de acudir ante el Instituto de Acceso a la Información Pública-IAIP- ó a este Departamento de Acceso a la Información Pública, tal como lo establecen los Arts. 132 y 134 de la Ley de Procedimientos Administrativos- LPA y 82,83 y 84 LAIP.
- c) *Notifíquese* la presente resolución, en el medio y forma señalados para tales efectos.



Lic. Álvaro Renato Huezo Melara
Jefe Interino del Departamento de Acceso a la Información Pública
y Oficial de Información.



nd/